



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

## JDO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MÁLAGA

C/ Fiscal Luis Portero Garcia s/n

Tel.: 951939075-677982332(FN,FL,JG)-677982333 (MA,AL)

Fax: 951-93-91-75 (FAX) -

(SA,GS)677982331

N.I.G.: 2906745020160000326

**Procedimiento:** Procedimiento ordinario 40/2016. **Negociado:** JG

Recurrente: [REDACTED] y [REDACTED]

Letrado: ISABEL MARINA GUERRERO PALOMARES

Procurador: ANA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ

Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA y [REDACTED]

Representante: JUAN DIEGO MIRANDA PERLES

Procuradores: AMALIA CHACON AGUILAR y EUSEBIO VILLEGAS PEÑA

Codemandado/s: [REDACTED]

Letrados: RAFAEL FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ

Procuradores: EUSEBIO VILLEGAS PEÑA

Acto recurrido: (Organismo: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA)

### SENTENCIA N.º 465/2016

En Málaga, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis

Visto, por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Málaga, don Santiago Macho Macho, el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento ordinario n.º 40/2016, seguido para conocer del interpuesto por la Procuradora Sra. Rodríguez Fernández, en nombre de don [REDACTED], asistida por la Letrada Sra. Romero Palomares, frente a resolución sobre responsabilidad patrimonial del AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, representado por la Procuradora Sra. Chacón Aguilar y asistido por el Letrado Sr. Miranda Perles.

Interviene como interesada [REDACTED], representada por el Procuradora Sr. Villas Peña y asistida por el Letrado Sr. Ruiz Vázquez.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** El recurso es interpuesto con escrito presentado en el Decanato el 21/01/2016, siendo remitido a este Juzgado en reparto realizado el siguiente día 27, y admitido a trámite, con resolución del 3/02/16, que acuerda el curso de los autos conforme al procedimiento ordinario de la Ley 29/98.

**Segundo.-** Seguido el curso de los autos, es sustanciada demanda con escrito recibido el 4/04/16, donde es expuesto cuanto es tenido por conveniente para pedir sentencia:

“... declarando no ajustada a derecho la resolución del Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Decreto de 27 de noviembre de 2015, dictado en el expediente de responsabilidad patrimonial 67/12, por el que se desestima la reclamación presentada por nuestro representado y en su virtud se condene al citado Ayuntamiento a abonar 31.041,33 €, euros, fijados con referencia al día de la lesión (1 de abril de 2011), más su actualización, a la fecha en que se puso fin al



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



procedimiento administrativo (27 de noviembre de 2015), con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

Esta cantidad total deberá incrementarse con los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria, tal y como establece el art. 141.3 de la LRJ y PAC, y ello desde que se puso fin al expediente administrativo (27 de noviembre de 2015) hasta el dictado de la Sentencia.

A partir de dicha fecha los intereses de mora procesal por la cantidad total anterior, art 106.2 de la LJCA.

Todo ello con condena en costas”.

**Tercero.-** Conferido traslado a la Administración para contestar a la demanda, lo hace con escrito presentado el 25/05/2016, donde expone cuanto tiene por oportuno para pedir sentencia que desestime el recurso, con imposición de costas.

Conferido traslado a la interesada para contestar a la demanda, lo hace con escrito presentado el 20/06/2016, donde expone cuanto tiene por oportuno para pedir sentencia que confirme la resolución que se recurre, absolviéndose en consecuencia de todo pedimento desfavorable al ayuntamiento de Marbella, con imposición de costas al recurrente por las razones expuestas.

**Cuarto.-** En decreto de 23/06/2016 es fijada la cuantía en 31.041.33 €.

Mediante auto de 6/07/2016 es acordado el recibimiento a prueba el pleito, admitiéndose y teniendo por practicadas las admitidas, que son puestas de manifiesto a las partes para conclusiones, presentadas con escritos recibidos los días 11/07/2016 la parte recurrente, el 20/07/2016 la parte interesada, y el 7/09/2016, rehabilitando plazo, la Administración recurrida. Los autos quedan para sentencia con resolución de 23/09/2016 y una vez unidos los resguardos de notificación de la misma y declarada firme con diligencia del pasado día diez de octubre.

**Quinto.-** En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las prescripciones legalmente establecidas.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** El objeto del presente recurso es determinar si se ajusta a derecho el decreto 27/11/2015 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella que, dictado en el expediente de responsabilidad patrimonial 67/12, desestima la reclamación presentada por el ahora recurrente el 27/03/2012 para el cobro de 31.041,33 € por daños sufridos el 1 de abril de 2011 por caída desde la escalera situada en los Llanos de Ramón junto al edificio Mayoral.

La parte recurrente alega, en síntesis:

-El expediente tiene su origen en los daños corporales sufridos por mi mandante el 1 de abril de 2011, por una caída en la escalera de bajada al paseo marítimo, situada en los Llanos de San Ramón, junto al edificio Mayoral de Marbella. En los folios 19 y siguientes del Expediente Administrativo consta el parte de urgencia en el que figuran, parte final del folio 19 y principios del 20, las fracturas sufridas.

La reclamación de responsabilidad patrimonial se presentó dentro del plazo de un año, el 27 de marzo de 2012, y por importe de 39.627,79 €, folio 1 del Expediente Administrativo (en adelante EA), cantidad que vamos a reducir por los motivos que expondremos.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



-El fundamento de la resolución desestimatoria adoptada, folio 193 y siguientes de EA, se basa fundamentalmente en la falta de acreditación del lugar y forma en que se produjo el accidente, la falta de relación de causalidad entre el daño y el servicio, folio 197 del EA.

A ello se une la cita de un Dictamen del Consejo Consultivo en el mismo folio 197 del EA como apoyo de esa fundamentación.

Sin embargo si uno procede a la lectura de dicho Dictamen, se acompaña como documento nº 1, Dictamen 131/2007, de 12 de marzo, del Consejo Consultivo, el caso no es similar al caso que nos ocupa. En aquel caso únicamente se contaba con la palabra de la accidentada.

Había que creer en ella para aceptar que el accidente se había producido en el lugar que ella decía.

En el caso que nos ocupa el lugar está claro. Se puede inferir de las testificales que cayó de dos metros y que cayó por el lateral de la escalera de los Llanos de San Ramón.

-A ello se une la circunstancia fáctica de que por el lugar por el que cayó el accidentado, en la parte final de la escalera, no existía barandilla y en la parte anterior tenía un murete para apoyarse de sólo 60 cm de altura, (ver sobre esto último el folio 5 del informe pericial que se aporta con esta demanda).

Este es un dato que se acepta por las partes. De hecho la barandilla fue puesta a los pocos días de la caída del [REDACTED] Así lo expone el informe de la Delegación de Obras y Servicios Operativos, folio 65 del EA, y lo reconoce la compañía aseguradora, folio 51 del EA.

Destacamos como en el informe del Servicio de Obras la ausencia de barandilla se considera un defecto que debe ser subsanado.

Así, los servicios operativos dan parte para subsanar “la deficiencia”, folio 65 del EA. Se da el parte para poner la barandilla el 6/11/2012, folio 90 del EA.

Se da cuenta en el expediente de que se ha puesto la barandilla, folio 104 del EA.

La compañía de seguros del Ayuntamiento de Marbella reconoce, folio 4 de la resolución, 46 y 51 del EA, que la escalera no cumple con la normativa aplicable, aunque manifiesta que sí cumple con la aplicable en la fecha de su construcción, lo cual no se ajusta a la realidad: la Compañía ni acredita cuándo se construyó, ni qué normativa era la aplicable, ni tiene en cuenta si debe adaptarse a la legislación actual.

Lo cierto, como se acredita con la pericial que se acompaña, es que no se cumplía ni la normativa aplicable en la fecha de los hechos ni la aplicable en la fecha de construcción de la escalera.

-En cuanto al Dictamen nº 776/2015, de 18 de noviembre, del Consejo que sí se refiere a este asunto, folios 173 y siguientes del EA:

1.- Parte de la afirmación de que la escalera fue construida antes de la entrada en vigor del Decreto 293/2009, folio 190 del EA, dato que no extrae de ningún documento, lo inventa literalmente. En todo caso la normativa anterior regulaba igualmente la exigencia de barandilla.

Lo ampliamos más adelante.

2.- Afirma que el lugar difícilmente puede generar peligro, folio 189 del EA. La verdad es que no puede compartirse dicha afirmación a la vista de las fotografías.

3.- No es cierto, folio 189 del EA, que sea perfectamente apreciable la escalera y su configuración; la escalera tiene un giro de 90 grados que impide observar que en el último tramo el muro en el que apoyarse baja de altura ostensiblemente. Es decir, se pasa de apoyarse en un muro, inferior también a la medida exigida, a bajar el muro cerca de 54 cm, de los 90 mínimos exigidos, tras girar 90 grados.

4.- El muro de protección de 60 y 36 cm no cumple la normativa, anterior y posterior a 2009.

5.- La escalera es ancha, pero una persona de edad busca donde apoyarse. Más si viene apoyándose en el murete de la parte anterior de la escalera, que era de más altura.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



6.- Se afirma en el Dictamen, folio 190 del EA, que la parte defiende que la caída fue desde una altura de 2 metros, pero que lo cierto es que pudo ser desde dos metros y medio. Más cierto es que no lo inventa la parte sino que lo dicen dos testigos, con experiencia, bombero y médico de profesión.

En todo caso, en los 2,5 metros el muro tenía 60 cm, incumpliendo igualmente la normativa, que exige un mínimo de 90 cm.

-Existen pruebas testificales y documentales:

De las testificales se desprende que el accidentado cayó por el lateral de la escalera, donde precisamente debía estar la barandilla que hubiera impedido dicha caída.

Así [REDACTED] en su declaración manifiesta que vio al accidentado tendido en el suelo, en la bajada de la escalera, en el lateral en el hueco de la escalera, con un golpe en la cabeza que sangraba, cayó desde altura. No observamos en la copia del expediente, salvo error por nuestra parte, la declaración de este señor por lo que la aportamos como documento nº 2. En nuestra copia del EA se salta del 113 al 116 del EA, por lo que imaginamos que en el original en el juzgado debe estar.

[REDACTED], folio 112 del EA, manifiesta que se encontró al reclamante tendido al lado de la escalera. Supone que cayó de la escalera, de una altura más o menos de dos metros, lo dice por su condición de bombero. La escalera tiene bastante altura.

[REDACTED] folio 109 del EA, manifiesta que el hombre se cavó por el lateral de la escalera. Por la posición que estaba cavó por el lateral, por una altura de 2 metros aproximadamente. No había barandilla. Reitera hasta tres veces que cavó por el lateral de la escalera.

Parece claro que de haber existido una escalera con barandilla, en el lateral por el que cayó, nuestro representado podría haber evitado la caída. Fue determinante que en el tramo anterior a donde se produjo la caída sí existía esa barandilla. Era al torcer 90 grados la escalera cuando de repente no hay barandilla. Por ello una persona que va bajando apoyada o sujeta a la misma, al torcer 90 grados, al ir a agarrar la misma lo que se encuentra es que no la hay, sin capacidad de reacción y con la inercia cae por el hueco, hueco que está a 2 metros de altura del suelo.

Consta en el expediente informe del Jefe de la Unidad de Servicios Operativos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella indicando que a fecha 31 de julio de 2012 se realizó inspección en la zona indicada, "comprobando la inexistencia de barandilla en el último tramo de la escalera". Con posterioridad se dio parte para "eliminar las deficiencias encontradas".

Consta acta notarial, folio 8 del EA, efectuada, el 18 de abril de 2011, por el Notario Don Juan [REDACTED], donde aparecen fotografías de la citada escalera en las que se aprecia la inexistencia de barandilla.

Mediante escrito de 1 de febrero de 2013, obrante en el EA, se aportó fotografía por esta parte de la barandilla, ahora sí, colocada en el lugar del siniestro.

-En cuanto a las lesiones quedan acreditadas con los partes médicos obrantes en las actuaciones, así como con el informe pericial presentado mediante escrito, con registro de entrada de 30 de julio de 2012, realizado por la Doctora especialista en valoración de daño corporal Doña María [REDACTED] folios 99 y siguientes del EA.

[REDACTED] folios 99 y siguientes del EA.

Importe que se reclama:

a) 23.891,33 euros por días hospitalarios, impenitentes, no impenitentes y secuelas.

Días hospitalarios. El citado estuvo hospitalizado hasta el 27 de abril de 2011 folio 21 del EA. Es decir, 27 días hospitalarios a 67,98 euros/día (1.835,46 euros) de conformidad con la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (BOE del 27).



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/17
			
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==			



Días improductivos, desde el 30 de abril al 24 de junio de 2011 (día del informe de traumatología de esa fecha), 56 días, folio 101 del EA, por 55,27 euros, 3.095,12 euros.

Días no improductivos, del 25 de junio al 9 de septiembre de 2011 (día del informe de traumatología de dicha fecha), 77 días, folio 101 del EA, por 29,75 euros, 2.290,75 euros.

Consta el informe de consultas externas, de 13 de mayo de 2011, en el folio 22 del EA. Cita para rehabilitación para el día 12/8/2011, folio 25 del EA.

Secuelas, folio 101 del EA:

Algias postraumáticas sin compromiso radicular 5 puntos,

Limitación movilidad de la columna cervical 7 puntos,

Limitación de movilidad de la columna toraco-lumbar 8 puntos.

Se ha tenido en cuenta la movilidad que tema antes del accidente, folio 102 del EA, lo que le ha supuesto una merma de la calidad de vida.

Total 20 puntos, por 757,75 euros, 15.155 euros.

Factor de corrección por perjuicios económicos, 10 %, 1.515 euros.

En total, 23.891,33 euros. La diferencia con la cantidad obrante en el expediente, folio 103 del EA, es que contamos 27 días hospitalarios y no 29.

b) 7.150 euros por 11 meses de renta de alquiler de vivienda en planta baja, ya que con anterioridad, (durante 30 años), vivía en una cuarta planta, sin ascensor. Su domicilio era en calle [REDACTED] Consta en el parte de urgencia, folio 19 del EA.

Ante las dificultades de movilidad producidas por el accidente, -ver en el folio 24 del EA como deambula con ayuda de un bastón-, se ha tenido que trasladar a una vivienda arrendada, sita en [REDACTED], con una renta mensual de 650,00 euros.

En el folio 101 del EA se refiere como antes del accidentes salía a la calle todos los días a pasear y que ahora casi nunca sale a la calle.

Consta en el expediente contrato de alquiler, de 1 de mayo de 2011, folios 29 y siguientes del EA.

En el escrito de inicio del expediente, folio 1 del EA, de 27 de marzo de 2012, ya consta dicha nueva dirección.

Consta 10 recibos de renta, folios 34 y siguientes, -el primero incluye fianza y primera mensualidad-, de mayo de 2011 a marzo inclusive de 2012, que suman 6.500 euros. Falta el de junio de 2011 que se ha extraviado, pero que la prueba de presunciones nos hace entender acreditado que en junio también habitaba en dicha vivienda, por lo que debemos añadir otros 650 euros, en tal 7.150 euros.

Suman ambos conceptos el importe de 31.041,33 euros.

La diferencia con lo solicitado en vía administrativo, folio 129 del EA, deriva de los días hospitalarios y del importe del alquiler de vivienda, ya que no hemos obtenido más recibos de renta.

-La caída se produjo debido a la falta de barandilla y la insuficiente altura del muro lateral de protección, de 40 centímetros frente a los 90 obligatorios.

Todas las normas sobre accesibilidad exigen unas características de las barandillas que no se han cumplido.

Así el art. 23.1 del Decreto 293/2009 de 7 de julio, dispone que el diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

En su art. 23.2 dispone que los tramos de escaleras que estén cerradas por paramentos verticales se dotarán de pasamanos a ambos lados. Los pasamanos se dispondrán de forma continua en todo el recorrido. Se colocarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,10 metros.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	5/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==





La anterior normativa se recogía en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo. En su art. 10.2 dispone que las escaleras contarán, letra f), con pasamanos que aseguren un asimiento eficaz a una altura comprendida entre 90 y 95 cm.

Las escaleras interiores de los edificios también debían tener esa altura, art. 24 letra g).

En su art. 43 disponía que las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto y de las normas que lo desarrollen, adoptando a tales efectos las medidas necesarias.

En el Dictamen del Consejo Consultivo nº 0776/2015, de 18 de noviembre, apartado IV, párrafo quinto, folio 188 del EA, se reconoce dicha falta:

‘Eso significa que el hecho de que se infringiera el artículo 23 del citado Reglamento es un dato a tener en cuenta...’

-La única cuestión que se cuestiona en el expediente administrativo es la causalidad imputable a la Administración. ¿Hubiera pasado el mismo accidente si hubiera existido barandilla? Parece claro que no, el riesgo no hubiera existido. Basta con mirar las fotos de la escalera, antes y después de colocar las barandillas, para llegar a esa conclusión.

El vínculo causal entre el daño y el servicio público es claro. Las lesiones se producen por una caída de una escalera de uso público que presenta deficiencias claras, lo cual se acredita con la prueba pericial que se acompaña como documento nº 3, informe del Arquitecto Superior Don

Como ha expuesto esta parte en el expediente administrativo, si el accidentado se hubiera mareado, se hubiera despistado, si hubiera existido cualquier incidencia de este tipo imputable a él, una barandilla de 90 cm o 1 metro hubiera impedido la caída.

Que la escalera tenga anchura no significa nada, ya que una persona de 87 años es normal que se intente agarrar a la barandilla, barandilla a la que tiene derecho, se mire la legislación que se mire. En todas se exige poner la citada barandilla.

Que fuera un momento de luz podría haber ayudado a que no se produjera el siniestro, pero i la curva en 90 grados, pasando de barandilla si a barandilla no, provoca que la existencia de luz no incida en los hechos.

Es por ello que no apreciamos concurrencia de culpas y por ellos reclamamos que se condene por el 100% del daño producido.

Abunda en dicha consideración que nos vemos limitados, a fin de evitar la desviación procesal, en pedir lo que se solicito ante la Administración, pero lo cierto es que si no existiera dicha limitación solicitaríamos también la indemnización permanente parcial, hasta 18.141,08 euros, un mayor importe por adecuación de vivienda, perjuicios morales de familiares y factor de corrección de la tabla V.

La parte recurrida alega, en síntesis:

-La carga de la prueba sobre la relación existente en los daños reclamados y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, corresponde a la recurrente; carga que no ha sido debidamente cumplimentada, como consta en las actuaciones.

A mayores, como indica el Consejo Consultivo de Andalucía en el dictamen 776/2015, emitido por mor de la reclamación de la recurrente:

“[...] Por lo que se refiere a la relación causal entre el “funcionamiento del servicio” y el daño alegado, corresponde a la reclamante su prueba (arts. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 6 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial), siendo de la Administración la carga de la prueba de los hechos



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/17
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==			



obstativos a su existencia (art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como ya se adelantó en el fundamento jurídico II

La parte reclamante afirma que la caída se produjo debido a la falta de barandilla y a la insuficiente altura del muro lateral de protección, de 40 centímetros frente a los 90 obligatorios, según el artículo 23 del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio).

Para una solución adecuada del presente caso ha de partirse de que como ha declarado este Consejo reiteradamente, que no todo funcionamiento anormal (o normal) de un servicio público genera responsabilidad patrimonial, sino que es necesario que el mismo sea el determinante del daño, de modo que no hayan sido otras las circunstancias decisivas en su producción, pues en otro caso el instituto de la responsabilidad patrimonial se convertiría en una suerte de seguro universal. Eso significa que el hecho de que se infringiera el artículo 23 del citado Reglamento es un dato a tener en cuenta, pero no decisivo para la resolución del asunto.

En este orden de cosas, en el dictamen 810/2013 de este Consejo Consultivo se advierte que ni la titularidad pública de la vía, ni el deber de conservación de la misma en las mejores condiciones posibles para el tránsito de personas y vehículos, comportan la automática atribución de responsabilidad al Ayuntamiento reclamado. En efecto, no basta con probar que un accidente se ha producido en una vía pública para que surja el derecho a la indemnización. Si así fuera, las Administraciones Públicas se convertirían en aseguradoras universales de todos los riesgos *ratione loci* (o *ratione materiae*), incluso cuando el suceso dañoso pudiera haberse evitado por el damnificado obrando con la debida diligencia.

Como se indica en el referido dictamen y en otros posteriores, si se aceptara un planteamiento maximalista como el que se acaba de indicar, la responsabilidad objetiva de la Administración se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (STS de 5 junio de 1998). Solo atendiendo a la rica casuística que presentan los expedientes de responsabilidad por caídas en una vía pública puede llegarse a apreciar la existencia de responsabilidad o a descartar su existencia, considerando que aquélla presupone un nexo causal directo e inmediato entre el funcionamiento del servicio público y el daño alegado, que queda roto si el evento dañoso se debe a la conducta de la propia víctima.

En el supuesto sometido a consulta hay que tener presentes las siguientes circunstancias: el accidente ocurre a plena luz del día, siendo perfectamente apreciables las escaleras y su configuración; la escalera tenía una anchura suficiente para transitar por ella; en el lugar de la caída la escalera tenía un muro de protección de 40 centímetros de alto.

Las fotografías aportadas permiten apreciar un lugar de tránsito que difícilmente puede ocasionar por sí accidentes si no es por la inobservancia de la diligencia debida. Este Consejo Consultivo viene destacando que no puede ignorarse que el ciudadano debe observar un deber mínimo de cuidado, es decir, una diligencia que le permita desenvolverse con normalidad en una vía pública, evitando los riesgos socialmente tolerables y la propia disposición y organización de los espacios públicos, acomodando su conducta a los mismos.

Pero es que además, a lo anterior ha de añadirse, en primer lugar, que la escalera fue construida antes de la entrada en vigor del Decreto 293/2009 y que se desconoce con exactitud cómo se produjo la caída, esto es si fue en el lugar en que se denuncia y en qué circunstancias. Para la parte reclamante es razonable pensar que así fue, como esulta de las declaraciones testificales que consideran que la caída debió de producirse desde una altura de dos metros. Pero probablemente igual de razonable es Densar que se produjo a una altura de dos metros y medio, a la luz de los daños que presentaba el accidentado.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/17

  
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



En consecuencia, con los elementos de juicio que resultan del expediente no puede considerarse acreditada la relación de causalidad entre el “funcionamiento del servicio” y el daño porque se reclama,<sup>31</sup> sentido exigido por el instituto de la responsabilidad patrimonial.

La parte interesada alega, en síntesis:

-Negamos que se haya probado la causa del accidente, todo son hipótesis y suposiciones, lo único acreditado, en ello coinciden los tres testigos, es que ninguno lo vio caer, siendo la posición del lesionado lo que les lleva a concluir que debió caer por el lateral desde una altura de dos metros aproximadamente.

Ignoramos la causa de la caída siendo evidente, - nos remitimos como prueba objetiva e imparcial a las fotografías contenidas en el expediente administrativo -, que un uso adecuado de la escalera hacen imposible la producción de accidentes como el que nos ocupa, por lo que entendemos que no se cumple el requisito de la prueba de la relación causal.

La jurisprudencia de forma reiterada establece que la prueba de la relación de causalidad es requisito indispensable para que opere el sistema de la responsabilidad objetiva; que la carga de la prueba de la misma recae en el reclamante; y que no es suficiente a estos efectos probatorios la sola declaración del demandante.

-La existencia o no de barandilla en la escalera donde se produce la caída, - que a nuestro juicio no se trata de ninguna deficiencia ni irregularidad -, es normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, debiendo tenerse en consideración, no solo la ausencia de barandilla, sino también todas las circunstancias concurrentes en la producción del accidente, entre las que cabe destacar las siguientes:

1) Los daños se producen el 1 de abril de 2011, entre las 10 y las 11 de la mañana, así se recoge en los escritos de la parte actora y en las testificales, lo que nos lleva como primera conclusión a afirmar que el pretil delimitador de la escalera, aún sin barandilla, constituía un elemento visible sin que su uso adecuado pudiera ser origen de ninguna accidente. El pretil o muro delimitador es una solución constructiva más de uso frecuente, sin que suponga limitación alguna para la deambulación de las personas, y máxime en este caso donde se acredita que el recurrente no padece ninguna discapacidad, o limitación de la movilidad.

2) Otra prueba absolutamente objetiva, e imparcial sobre la inidoneidad del pretil para producir los daños que se reclaman, es el reportaje fotográfico adjuntado por el reclamante, que hacemos nuestra a efectos probatorios y que acreditan: A) La amplitud de la escalera. B) La plena visibilidad del muro, y la ausencia de obstáculos que hubiesen podido confundir al perjudicado tanto de su existencia, como de su altura de 40 cm, -casi medio metro de tabique delimitador -, y que si bien es cierto que no contaba con barandilla, - exigible sí el recurrente hubiese sido minusválido -, tiene una altura más que suficiente para impedir caídas al vacío si se baja la escalera de forma adecuada.

La parte recurrente atribuye como causadel daño única y exclusivamente a la ausencia de barandilla, sin embargo debemos recordar que la jurisprudencia aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de la administración, indica que no todo daño derivado del funcionamiento del servicio público es indemnizable, debiendo aplicarse la denominada cláusula relativa al estándar del funcionamiento del servicio público, “según el cual la Administración no debe responder cuando el servicio público no funcionó por debajo del nivel exigible doctrina que es aplicable al caso que nos ocupa a la vista de la amplitud de la escalera, visibilidad, e inidoneidad del pretil para causar daños siempre que se haga un uso adecuado de la escalera.

Debemos insistir en las fotografías aportadas como prueba objetiva de que solo el uso inadecuado de las escaleras puede ocasionar los daños que se reclaman, y que dichas escaleras, aún sin



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	8/17
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==			





barandilla, no son peligrosas ni idóneas para provocar los daños que se reclaman si se camina con un mínimo de atención y cuidado que evidentemente no prestó el recurrente a la vista del resultado.

Entendemos que el desencadenante del daño, o causa primera, no es la falta de barandilla sino el uso inadecuado de la escalera, indicando a este respecto el Dictamen del Consejo Consultivo (pag 17).

-Las normas dictadas en materia de supresión de barreras arquitectónicas, y que según la recurrente pudiera afectar desde el punto de vista de la legalidad urbanística a la escalera donde se produce el daño, son para Andalucía, el Decreto 72/1992, y el Decreto 293/2009, éste último vigente en la actualidad.

Ambas normas pretende eliminar las distintas barreras que puedan encontrar los minusválidos y las personas con movilidad limitada, sí bien y en lo que al urbanismo existente en la fecha de su entrada en vigor se refiere, dicha adaptación se realizará de forma gradual en función de las disponibilidades económicas, estableciendo el último decreto un plazo máximo que termina el 1 de enero de 2019.

Los decretos mencionados van dirigidos a personas discapacitadas o con movilidad reducida, definiéndose en el Decreto actualmente en vigor, (Decreto 293/2009), en el art 34 (Capítulo II, Definiciones y clasificaciones), que debe entenderse por persona discapacitada. El artículo 35 define a la Persona con movilidad reducida. En cuanto al Plan de accesibilidad, siendo ésta la tarea que debe acometer el Ayuntamiento suprimiendo las barreras arquitectónicas que detecte, se define en el art 36.

-Alternativamente y para el supuesto que S.S. entendiera que existe responsabilidad del Ayuntamiento de Marbella, solicitamos la aplicación de la teoría jurisprudencial de la concurrencia de culpas, en atención a las circunstancias expuestas, minorándose la indemnización que finalmente se determine en al menos un 75%, por cuanto el recurrente ni es discapacitado, ni tenía la movilidad reducida en el momento de la producción del accidente, constituyendo el pretil aún sin barandilla, un elemento del mobiliario urbano que cumplía la normativa urbanística tanto del momento en el que se construyó, como con la actual.

Es imposible, e inasumible desde el punto de vista del coste, pretender que la administración adapte todas las construcciones existentes a las exigencias de los Decretos de Supresión de barreras Arquitectónicas, de ahí la previsión de los Planes de Accesibilidad y de la Adaptación gradual, siendo por otra parte la escalera un elemento inidóneo para causar daños si su uso es el adecuado.

-Se reclama una indemnización ascendente a 23.891,33 euros por las lesiones sufridas por el recurrente, adjuntando como prueba de su petición un Informe pericial que impugnamos en lo que se refiere a la determinación y puntuación de las secuelas por cuanto en ninguno de los documentos clínicos aportados, todos de los especialistas que atendieron al recurrente, describen la existencia de secuela alguna, debiendo basarse el Informe Pericial en la documentación clínica del accidente. Tampoco se aplica por la perito la fórmula de secuelas concurrentes.

Se solicita una indemnización de 1.515,50 euros aplicando el 10% de factor de corrección sin que proceda el abono de indemnización alguna por este concepto por cuanto éste solo es aplicable cuando el perjudicado se encuentra en edad laboral. El factor de corrección se calcula en función del salario que percibe el trabajador tiene como fin corregir los posibles desequilibrios que se pudieran producir en el salario del perjudicado como consecuencia accidente.

Se solicita una indemnización ascendente a 7.150 euros por 11 meses de alquiler de vivienda en planta baja, negando que proceda indemnización alguna por este concepto por cuanto no está



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	9/17

  
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



justificada la necesidad de dicho alquiler, debiendo añadirse que en el supuesto hipotético que se probase su necesidad la indemnización no debía superar más allá del periodo de curación, que la parte actora cifra en 160 días, (cinco meses y no los 11 meses que se solicitan de contrario)

En el supuesto hipotético que S.S. entendiase que existe algún tipo de esponsabilidad del Ayuntamiento de Marbella, y consecuentemente de mi mandante, solicitamos que se aplique la franquicia pactada con el Ayuntamiento para la fecha del siniestro, 1 de abril de 2011, ascendente a 6.000 euros.

Nos remitimos como prueba de lo manifestado a la copia de la Póliza que adjuntamos con este escrito, regulándose la franquicia alegada en la pag. 4.

**Segundo.-** El sistema legal de responsabilidad de la Administración responde a una cláusula general de responsabilidad, art. 139 Ley 30/92 y cc, que en palabras de la más autorizada doctrina, no es convertir al sistema en un puro régimen de causalidad material, en el que el único elemento relevante de imputación sería el nexo causal entre la acción administrativa y el daño resultante, sin atención alguna hacia cualquier criterio legal de imputación, convirtiéndose el sistema en una gigantesca máquina de aseguramiento social frente a todo tipo de daños conectados a una actuación administrativa.

Lo que realmente hace la cláusula general, sin excluir en modo alguno la exigencia de una causalidad o imputación del hecho dañoso a la Administración, que excluye sin más el reconocimiento de que su responsabilidad haya pasado a ser general y objetiva es desplazar el elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la situación del patrimonio de quien sufre el perjuicio, el cual deberá justificar que "no tiene el deber jurídico de soportar" dicho daño, en los términos del art. 149 de la Ley 30/92, para poder justificar su pretensión reparadora, giro al que convencionalmente se ha llamado "objetivación" de la responsabilidad patrimonial de la Administración, introduciendo un cierto equívoco innecesariamente, pues no se quiere decir, obviamente que cualquier perjuicio económico que pueda resaltar de los servicios administrativos tenga causa jurídica para pretender una reparación.

La cláusula lleva ínsitos unos criterios normativos de imputación –ilegalidad, culpa subjetiva, culpa objetiva, riesgo y sacrificio especial- que no pueden ser utilizados indistintamente para cualquier tipo de actividad administrativa y ante cualquier evento dañoso, de suerte que si el daño no fuere imputable a la Administración a título de anormalidad del servicio público siempre sería posible tal imputación a título de riesgo o de sacrificio especial.

En la generalidad de los casos, las actividades jurídicas o materiales que la Administración lleva a cabo no son en sí mismas peligrosas ni creadoras de situaciones de riesgo patrimonial, y por ello, si se realizan bajo pautas de normalidad, los eventuales daños resultantes no le son en modo alguno imputables; únicamente su prestación anormal, irregular o deficiente puede operar como criterio legal de imputación de tales daños a la Administración.

Sólo el supuesto de daño producido por actuación de un riesgo creado por la Administración en su propio interés es, en realidad, como ocurre de no muy diferente manera en las situaciones de derecho civil estricto, es el único caso de una responsabilidad patrimonial de la Administración estrictamente objetiva, de causalidad material. Se trata, en este último supuesto, de daños excepcionales derivados de peligros o riesgos que ocasiona la actividad administrativa, en que el título de imputación por riesgo operará siempre que el hecho determinante del daño se hubiera producido, pese a haberse adoptado todas las medidas reglamentarias de seguridad –en otro caso, de haber incumplido las medidas de seguridad el título de imputación sería el funcionamiento anormal-.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	10/17
			
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==			



Conforme a reiterada jurisprudencia, como la SSTS 1747/2011, de 4 abril 2011, Recurso: 3284/200, FJº 5º, de 23 mayo 2014, recurso 5998/2011 FD 3º, o la de 7 noviembre 2014, recurso 439/2012, FD 4º, que la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 Ley 30/92 : a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Añadiendo la misma sentencia que la jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa". Avanzando más en esa misma línea reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Se insiste en la STS 19 de junio de 2007, rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público.

En este sentido, la STS de 05 de diciembre de 2014, recurso 1308/2012, en su FD 3º:

“...La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

Se insiste STC 19 de junio de 2007 , rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".”.

Por otra parte, en cuanto a la relación causalidad, dice STS 2070/2011, 15 abril 2011, Recurso: 1993/2006, Recurso: 1993/2006, FJ9 º, o la de 17 diciembre 2013, recurso 4256/2011: es de recordar que constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa. En el sentido expresado, la sentencia de 15 de junio de 2010 -recurso de casación 5028/2005 -.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	11/17

  
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



En lo que atañe al requisito de imputabilidad del daño a la Administración por una actividad dañosa que revista la forma de omisión y materialmente se deba a un funcionamiento anormal de los servicios públicos las primeras sentencias del TS que recogieron la responsabilidad de la Administración datan de 28 enero 1972, Ar. 351, y 8 febrero 1973, Ar. 622 creándose un sólido cuerpo doctrinal, formado sobre todo en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica, que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes. Como señala la doctrina, y antes ya indicamos, no existirá responsabilidad si la Administración ha respetado los estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio, salvo en los casos concretos de responsabilidad por riesgo -excluida la fuerza mayor- y responsabilidad por enriquecimiento. En consecuencia, en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la Administración que posibilita la realización del evento dañoso. Pero la actuación inadecuada de la Administración no es equivalente, ni se produce sólo, por la concurrencia de culpa o dolo del agente autor del daño, ni tampoco por la condición ilegal del acto. La existencia de dolo, culpa o ilegalidad puede ser un indicio calificado a la hora de establecer la obligación de indemnizar, pero no es suficiente por si sola; pueden existir daños causados por culpa o ilegalidad que, sin embargo no sean indemnizables. Lo que significa actuación inadecuada es que la Administración al realizar la actividad, o inactividad, dañosa ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es, con infracción de lo estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios -infracción de la lex artis médica en este concreto ámbito según las SSTs de 27 julio 2002 y 30 de marzo 2004, entre muchas-. En cada momento histórico, la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. Lo responsabilidad aparece cuando estos estándares son incumplidos con producción de un daño a una persona o grupo de personas. El problema en consecuencia radica en saber cuales sean estos estándares, puesto que nuestra Administración, al contrario de lo que sucede en la empresa privada, ni está habituada ni ha sido proclive, a fijar objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas de servicios, reguladas en el art. 16.7 del RD 1259/99-. En su defecto, estos parámetros de rendimiento vienen fijados de manera empírica y casuística por la jurisprudencia, en función de razones de equidad, creando un casuismo tan variado que perjudica la seguridad jurídica, tras valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable, pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de que la Administración está dotada y con lo que es razonables esperar de ella.

En definitiva, ausentes los estándares o niveles de prestación mínimo o media y los niveles de tolerancia, hay que estar a los precedentes administrativos y judiciales y, en definitiva a valorar las circunstancias de cada caso, conforme a los argumentos de las partes y pruebas practicadas.

**Tercero.-** Proyectadas las anteriores consideraciones sobre el caso de autos, la acción u omisión administrativa con la que trata de conectarse el supuesto daño producido se insertaría en la materia de competencia local a que se refiere el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que comprende el mantenimiento de las vías públicas en condiciones adecuadas para su utilización, que se conecta con la previsión del art. 54 de la misma Ley 7/1985, al establecer que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	12/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==





en la legislación general sobre responsabilidad administrativa" y en línea con esto, el art. 223 del RD 2568/86, de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales dispone que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa".

Por su parte, el art. 3.1 del RD 1372/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que "1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local".

Por tanto, el actuar administrativo debe procurar el mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que es inexcusable de mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad quienes las utilizan esté norma cuanto a los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su fin específico, sin que sea permisible que presenten dificultades u obstáculos a la normal circulación peatonal tales como agujeros, depósitos de arena, u otros materiales, etc., sin que por lo menos estén adecuadamente señalizados o con la adopción de las medidas pertinentes para la prevención, en tales casos, de posibles eventos dañosos.

Quedando dicho en el fundamento jurídico precedente que la carga de la prueba es de la parte recurrente. Al respecto, que el día 1 de abril de 2011, el recurrente estaba tendido en el suelo escalera de bajada al paseo marítimo, situada en los Llanos de San Ramón, junto al edificio Mayoral de Marbella, recibiendo atención médica por lesiones, queda acreditado con el testimonio de tres personas que en ese estado encontraron al recurrente, así como con el parte de asistencia de urgencias del Hospital Costa del Sol del mismo día de los hechos, 11,29 horas, donde se hace constar que lesionado tiene 87 años –folio 19-.

Obran en el expediente testificales –folios 109 y ss.-:

Don [REDACTED]:

"...Estaba trabajando, como medico en la clínica Ochoa., un hombre se había caído por el lateral de la escalera, y sufrió un traumatismo craneal con herida sangrante. Porcedí a inmovilizar y parar la hemorragia. Se llamo al 061 y fue una UVI móvil

No lo vio de caer, por la posición que estaba cayo por el lateral, por una altura e 2 metros aproximadamente.

No había barandilla pero si es bastante ancha la escalera.

Por la posición del cuerpo cayó desde la alturas alta o desde el siguiente.

El hombre estaba consciente. ....

Era de DÍA con claridad ...

Traumatismo craneal con herida, limitación a la movilidad cervical. Mucho dolor y por la posición el cuerpo caído desde el lateral de la escalera. ..."

[REDACTED]  
"...Haciendo deporte, se encuentra al reciamente tendido al lado de la escalera de bajada a la clínica Ochoa desde Llanos de San Ramón, se encuentra al reclamante en el suelo siendo atendido por el doctor de la clínica. Le ayudaron al doctor.

Supone que se cayo de la escalera, por una altura mas o menos de 2 metros por la heridas que presentaba que caer desde altura, lo piensa por su condición de bombero.

La escalera es ancha pero con altura bastante ....

Había bastante claridad, era de dia. ...



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	13/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==





Lesiones en la cabeza, cuello y ojo, y no recuerda si quizás un brazo, era importante por la sangre, que echaba por la cabeza y ojo. .”

[REDACTED]-cuya copia de DNI obra en el expediente, pero no su declaración, de la que se aporta copia como documento nº 2 de la demanda:-

“..Iban corriendo sentido Puerto Banus – Marbella, y vieron a su señor tendido en el suelo, en la bajada de la escalera que baja desde los Llanos de San Ramón, en el lateral. En el hueco de la escalera.

Con un golpe en la cabeza que sangraba.

No lo vio de caer, por el golpe supone que cayó desde altura y por el lugar donde tenía la herida, por que lo sabe. ....

Era de día, había claridad. ...”

No se podía mover, sangre en la cabeza, en la cara cree que tenía pero no lo recuerda. ...”.

No existe prueba directa sobre la causa de que el recurrente fuera encontrado en el suelo en ese estado. Pero de los referidos testimonios se infiere que, como es afirmado en la demanda, cayó desde la escalera, no la causa de la caída (falta barandilla como se dice, tropiezo, mareo, tirarse a posta...etc...), puesto que ninguno de los testigos presencié el momento de la caída.

El estado de la escalera se aprecia en la copia de acta notarial realizada 18/04/11, pocos días después de los hechos, a instancia del ahora recurrente, con diez fotografías –folios 8 a 18-.

Meses más tarde, es realizado informe de 6/11/12 Unidad Servicios Operativos –folio 65-, señalando: “...El 31 de Julio de 2012 se realizó inspección a la zona indicada, comprobando la inexistencia de barandilla en el último tramo de la escalera. El 6 de Noviembre de 2012 se trasladó el Informe de Inspección a la Nave de Servicios Operativos para la generación del parte de trabajo correspondiente, con el fin de eliminar las deficiencias encontradas.” Acompaña informe con 4 fotografías –folio 78-.

Fotografía de parte de la escalera con barandilla colocada “recientemente” es apostado por la ahora recurrente con escrito presentado el 1/2/13 –folio 106-.

La escalera que se ve en las fotografías es muy ancha con giro de noventa grados en un punto, pretil en sentido de giro bajo luego recrecido con una barandilla, jardineras en el otro lado. Ex ante, las características de la escalera, incluso antes de colocar la barandilla, y su estado, es compatible con el uso, sin que si entrañara un peligro para su utilización para los peatones, por lo que, la falta de barandilla, sin perjuicio de que pudiera incumplir la normativa prevista para la protección de minusválidos, no rebasa los límites impuestos por los estándares de rendimiento en el funcionamiento del servicio público.

La falta de barandilla era compatible con el uso propio de la escalera, paso de peatones, sin implicar en si peligro alguno, máxime siendo de día y con perfecta visibilidad, siendo perfectamente posible pasar por su lado sin caerse, o ir por el centro de la escalera o ir por el otro lado con jardinera.

En todo caso, aún estimándose que la falta de respuesta administrativa al no tener instalada la barandilla, es deficiente por no responder al estándar de mantenimiento de la escalera, la misma por sí sola no bastaría para imputar la responsabilidad a la Administración, puesto que al caso, en la perspectiva general de la misma, no tiene entidad, repetimos para entrañar en si peligro, siendo en si irrelevante jurídicamente en orden a la generación de un riesgo resarcible (en este sentido, entre otras, para asuntos similares STSJ País Vasco de 20 diciembre 2013, rec. apelación 684/11). Nada impedía, como queda dicho, la visión y elusión de la falta de barandilla, de admitirse a efectos dialécticos que por su falta y no por otro motivo, se precipitó al suelo el recurrente, a mínima atención que se hubiera observado.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	14/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



Como dice, entre otras la STSJ de Cataluña de 7 febrero 2014, rec apelación 136/13, “no es que se traslade la culpa de la Administración al ciudadano como aduce la parte apelante sino que sí es exigible a los peatones una diligencia mínima al deambular con el fin de sortear los posibles obstáculos de la acera y pavimento, lo que no equivale a una aplicación errónea de la teoría de la culpa y/o responsabilidad objetiva”.

En definitiva, y como dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sentencia de 16 de abril de 2004), la posibilidad de caerse en la vía pública surge desde el mismo momento en que se transita por ella, sin que las consecuencias de esa caída puedan ser imputadas, sin más, a la administración responsable –en el mismo sentido, la Sala del TSJ de Málaga, en numerosas Sentencias, entre otras la nº 2193/2008, dictada el 28 de julio de 2008 en el recurso nº 59/2001-.

O como dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias llegó a afirmar en su Sentencia de 10 de abril de 2007 (JUR\2007\282055): “Por ello, estamos en presencia de un riesgo que no difiere de otros riesgos normales que tienen que sortear los personas en el viario público, va que no se puede desconocer el estándar mínimo de servicios de demanda social por las consecuencias extremas que pueda producir la Aplicación rigurosa del sistema objetivo de responsabilidad patrimonial de la Administración asociado exclusivamente al resultado lesivo sin valorar los demás elementos presentes. Así en muchos casos se trata deficiencias puntuales sin posibilidad de reacción inmediata por ser técnicamente imposible, o que la prestación de servicios conlleva efectos perjudiciales a los que no se puede hacer frente por razones económicas o jurídicas. En efecto, el limitado defecto de la baldosa que refleja la fotografía, no se puede confundir con el deficiente estado de acera, pues no impide ni obstaculiza el tránsito peatonal, sino que resulta plenamente practicable por el común de los usuarios. Constituyendo un obstáculo que puede considerarse normal y propio de la prestación de estado de conservación de las vías pública hasta el extremo de imponer precauciones especiales o estar en determinadas condiciones físicas para salvarlos”.

En el mismo sentido se ha pronunciado en múltiples ocasiones el Consejo Consultivo de Andalucía. Así además del dictamen obrante en el expediente de autos otros como el 672/2015, de 13 octubre 2015, 627/2015, de 23 septiembre 2015, 736/2014, de 29 octubre, 198/2015, de 11 de marzo, 103/2011, de fecha 9 de febrero de 2011, o el 688/2010, de 3 noviembre 2010, tiene dicho que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando transiten o se desplacen por lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino sólo aquella que escape al dominio propio de la referida diligencia media o diligencia más intensa que singulares circunstancias pueden imponer al ciudadano. En los eventos dañosos correspondientes a “caídas en vía pública”, deben distinguirse los supuestos que implican una manifiesta infracción de los deberes de diligencia en el cuidado de la vía pública (por ejemplo: los ciudadanos. No resulta exigible, según la conciencia social, que en una gran ciudad el pavimento de toda ella carezca de fisuras menores, o no haya alguna ausencia de losetas, pues la tarea que conduciría a ello es prácticamente imposible.

En este sentido destaca la expresiva STS, Sala 1ª de 22 de febrero de 2007 que " Es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida ( STS 21 de octubre de 2005 y 5 de enero de 2006 ), de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar ( SSTS de 11 de noviembre de 2005 y 2 de marzo de 2006 ) o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida ( STS 17 de julio de 2003 ), en aplicación de la conocida regla id quod plerumque accidit (las cosas que ocurren con frecuencia, lo que sucede normalmente), que implica poner a cargo de quienes lo sufren aquel daño que se produce como consecuencia de los riesgos generales de la vida inherentes al comportamiento humano en



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	15/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



la generalidad de los casos, debiendo soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención.

Del mismo modo a STS de 18 julio 2005, señala: “En cuanto a la cuestión principal de si cabe ^ o no imputar, en todo o en parte, al ayuntamiento demandado, la responsabilidad de la caída de la actora ocurrida en 4.5.92 en las citadas escaleras, este Tribunal, después de un examen imparcial de todas las circunstancias en ella concurrentes, de manera especial, la gran amplitud de aquellas, la existencia de dos barandillas de apoyo, el conocimiento de que la Sra. Antonieta tenía de ese lugar, la mínima irregularidad detectada en uno de sus escalones que pudo ser salvado, de haber mediado la necesaria precaución por su parte, y la falta de otros accidentes en ese lugar a pesar de no haber sufrido ninguna modificación posterior, estima, que la causa de la caída de la Sra. Antonieta no puede ser cargada al Ayuntamiento sino más bien a la propia actuación de la adora pues el hacerlo seña exagerar la obligación municipal de conservar las vías públicas en las adecuadas condiciones de seguridad al extenderla a un grado de perfeccionismo irrazonable con olvido de que determinado nivel individual de cuidado debe ser observado en virtud del principio de responsabilidad personal que constituye uno de los pilares de la sociedad”.

También la sentencia del 13 de abril de 2009, del TSJA, Sala de Granada, Recurso: 208/2002 , en su FD 6 dice: “Ésta es precisamente la consideración establecida por la policía local en el informe evacuado con posterioridad a la inspección ocular desarrollada en el lugar de los hechos, sin que la reseña efectuada en el mismo en relación a que quedaría mejor la colocación de una barandilla, pueda entenderse como un elemento que sirva para establecer el nexo causal entre la omisión de tal colocación, que competiría al ente local, y la caída; porque no existe dato alguno que determine la peligrosidad de la rampa sin la existencia de la mentada barandilla”.

O la sentencia del 05 de julio de 2007 del TSJA, Sala de Sevilla, Recurso: 1026/2002, que en su FD 4 dice: “En este sentido, de la valoración de lo actuado no se desprende que concurra dicho nexo de causalidad, ante la insuficiencia de evidencias de que el daño sufrido haya procedido de actuación alguna de la Administración, por lo que procederá la desestimación del recurso. En efecto, este Tribunal no considera que en la caída de la alumna sea causa eficiente la ausencia de pasamanos en las escaleras, puesto que se trata de escaleras muy amplias, que salvan un desnivel corto de tan solo cuatro peldaños, sino a la propia actuación de la menor, que por un descuido impredecible, bajar de forma atropellada, o cualquier otra circunstancia ajena a la conformación de las escaleras, perdió el equilibrio y cayó al suelo”.

Igualmente la sentencia de 25 de enero de 2007 de la misma Sala últimamente citada, Recurso: 286/2003, cuyo FD 4, dice: “no considera que la caída de la Sra. Daniela, persona perfectamente capaz no necesitada de especial atención, se debiese, como causa eficiente, a la ausencia de pasamanos en las escaleras, sino a la propia inadvertencia o actuación de la interesada, muy probablemente con motivo de las propias prisas en marchar, que expreso a la profesora que la atendió en el piso superior, tras su consulta sobre la educación de adultos. Por ello, la desestimación del recurso se impone”

Señalando el TSJ de Madrid en sentencia del 11 de noviembre de 2015, Recurso: 561/2013: “a conclusión anterior nunca se vería alterada por el examen del estado de las escaleras y su adecuación o no a las normas técnicas o de seguridad exigibles pues, al no haberse alcanzado convicción sobre el modo de producción de la caída, no puede afirmarse tampoco que un eventual incumplimiento de tales normas haya sido el origen de los daños y perjuicios por los que se reclama. Pues debe recordarse que el incumplimiento en sí mismo considerado no resulta significativo en este ámbito si no se le puede individualizar como el evento determinante del daño”



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	16/17

  
zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==



**Cuarto.-** Conforme previene en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, tras la reforma por Ley 37/2011, en vigor desde el 31 octubre 2011, desestimado del recurso, implica imponer el pago de las costas a la parte recurrente, sin incluir en ellas las de la aseguradora, que no ha sido demanda. En este sentido, recuerda TS, Sala Contencioso Sección 6, en auto del 25 de octubre de 2006, Recurso: 303/2002, FD 4º

*“Esta argumentación jurisprudencial sigue siendo válida, como afirma también el auto de 25 de febrero de 2005 -casación para la unificación de doctrina 194/2003 -, aun cuanto el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción no distinga como hacía el número 2 del artículo 131 de la Ley de 1956 derogada entre la parte demandada y la coadyuvante, toda vez que la condición de codemandada de la compareciente para defender un interés legítimo no es bastante para gravar al recurrente con las costas causadas a instancia de aquella entidad, a la que no ha traído al proceso, sino que ha comparecido en él de modo voluntario, y ello sin perjuicio de los honorarios y derechos de que se trate los puedan reclamar los profesionales interesados de la parte cuya representación y defensa les fue otorgada.*

*Procede por tanto estimar la impugnación formulada en el presente incidente y declarar como indebidos los honorarios incluidos en la tasación de costas correspondientes a la minuta del letrado que actuó en defensa de la entidad Mapfre Industrial,...”..*

En atención a lo expuesto,

### FALLO

**Primero.-** Desestimar el presente recurso interpuesto en nombre de don

**Segundo.-** Imponer el pago de las costas del juicio a la parte recurrente, excluidas las de la aseguradora.

Así lo acuerdo y firmo.

**PUBLICACIÓN.-** Dada y publicada al anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la dicta, estando constituido en Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, a presentar en este Juzgado en quince días.



Código Seguro de verificación: zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 23/11/2016 12:57:48	FECHA	23/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	17/17



zPG04YgHHDHBLtv3/Fc5nQ==